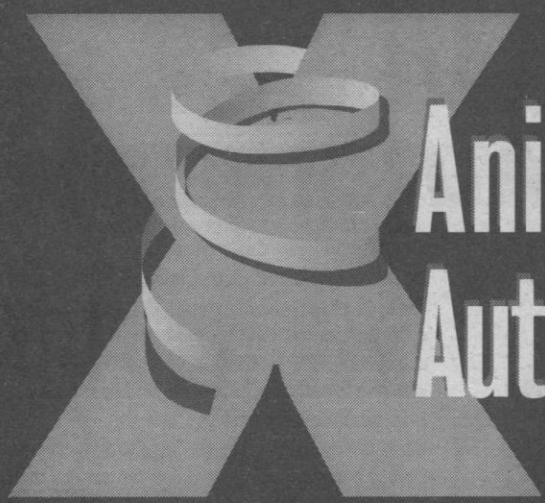




Aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León



VICUADRADO

SUPLEMENTO ICAL

*En todas las iniciativas
para el desarrollo
de nuestra Región.*



Caja Salamanca y Soria



Castilla y León en el Estado de las Autonomías

Europa vive en la actualidad momentos difíciles. En primer lugar, porque la crisis económica impone, pese a su carácter coyuntural, un importante esfuerzo colectivo para reactivar cuanto antes la economía e impulsar el bienestar social. En segundo, y esta cuestión reviste mayor gravedad, porque la construcción de la unidad política europea, con todos los retos que el proceso entraña pero con toda la luz que desprende la viabilidad de una vieja utopía, se ve enturbiada por las tristes consecuencias que para muchos ciudadanos está teniendo la eclosión incontrolada de los nacionalismos en el centro y este del continente. Se están evidenciando actitudes xenófobas que creíamos erradicadas de la cultura de progreso social de la que, seguramente, todos nos hacemos partícipes.

Hace algo más de una década, y en una situación también de crisis económica, la generalización del modelo autonómico al conjunto de las regiones españolas planteaba no pocos interrogantes. Quizás el grado de crispación que hoy vislumbramos en países de nuestro entorno viene a confirmar la validez de la apuesta que entonces hicimos, y del consiguiente proceso desarrollado desde entonces para hacer de España uno de los Estados más descentralizados del mundo.

Sin embargo, con ser lógico ese sentimiento de satisfacción colectiva, el actual debate sobre el sistema autonómico no debiera circunscribirse únicamente a esa valoración global. Ni siquiera para poner de manifiesto las excelencias de un modelo que, partiendo de un escrupuloso respeto a las voluntades políticas de autogobierno que pudieran conformarse, nos ha permitido acometer sin ningún género de traumas el difícil tránsito desde la dictadura centralista, hasta el Estado democrático de las Autonomías.

En definitiva, si algún éxito cabe atribuir al modelo español, articulado a partir de los principios básicos que se establecen en el Título VIII de nuestra Constitución, es precisamente su carácter flexible para autoconformarse y desarrollarse siempre dentro del marco de las previsiones constitucionales. Esta peculiaridad no sólo ha hecho del consenso político un instrumento valiosísimo para construir, consolidar y perfeccionar nuestra estructura territorial, sino que, además, nos permite, a partir de la constatación de que el sistema ha funcionado razonablemente bien, abrir y resolver nuevos y más profundos interrogantes acerca de la funcionalidad del Estado autonómico en su conjunto.

Quince años de andadura autonómica, diez de autonomía estatutaria en el caso de Castilla y León, constituyen una razón suficiente para que esta Comunidad como el resto de las Administraciones Territoriales, participe y se corresponsabilice en el perfeccionamiento del Estado Autonómico. Las Instituciones castellano-leonesas, dotadas de la indiscutible legitimidad democrática que se deriva de los sucesivos comicios electorales, constituyen una realidad plenamente consolidada tanto desde el punto de vista político como en lo que concierne a su mayoritaria aceptación por los ciudadanos.

El ritmo de los trasposos recibidos, 61 desde 1982, con la transferencia a la Comunidad de 15.241 puestos de trabajo antes pertenecientes al Estado, ha posibilitado un ejercicio satisfactorio de las competencias asumidas estatutariamente; esta tarea del gobierno regional, que también ha sido posible merced a los crecientes recursos que el sistema de financiación, fundamentalmente a partir de los acuerdos de 1986, le ha proporcionado a Castilla y León, que ha más que duplicado sus presupuestos en el período 1987-1992 y ha aumentado su participación en los ingresos del Estado en un 100% aproximadamente.

Por consiguiente, el grado de desarrollo autonómico alcanzado por esta región es alto y ha corrido en paralelo al experimentado por las demás Comunidades Autónomas del artículo 143. Esta circunstancia explica que Castilla y León haya aspirado con ellas a la asunción de nuevas competencias, de acuerdo con las previsiones constitucionales y estatutarias establecidas al efecto.

Los Acuerdos Autonómicos suscritos en 1992,

**Las instituciones
castellano-
leonesas
constituyen
una realidad
plenamente
consolidada
y aceptada
por los
ciudadanos**



JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY

Ministro para las Administraciones Públicas

**El grado de
desarrollo
autonómico
alcanzado es
alto y
paralelo
al de las
Comunidades
del artículo
143**

con la entrada en vigor en diciembre pasado de la Ley Orgánica de Transferencias en la que se materializa una parte importante de los mismos, han dado respuesta a esas legítimas aspiraciones y han situado a esta Comunidad en una posición de práctica equiparación competencial con las denominadas comunidades históricas. Además, las 33 nuevas competencias que en virtud de esta ley ya ha asumido la Comunidad Autónoma se incorporarán en este año al Estatuto de Autonomía, superándose con ello no sólo los límites competenciales establecidos inicialmente por la Constitución para estas Comunidades, sino también una etapa transitoria de consolidación institucional que en la actualidad hemos de considerar agotada.

La inauguración de un nuevo proceso de trasposos, con las consecuencias que del mismo han de derivarse en las estructuras administrativas tanto del Estado como de la propia Comunidad Autónoma, es la consecuencia más llamativa de una ampliación competencial cuya articulación práctica se verá reforzada por las potencialidades económico-financieras del nuevo acuerdo multilateral de financiación autonómica para el quinquenio 1992-1997. Pero comportará igualmente un esfuerzo negociador importante para la materialización de las correspondientes transferencias de los medios y recursos humanos que resultan necesarios para el ejercicio efectivo de las nuevas competencias.

Con todo, no será éste el reto más importante que habrán de afrontar nuestras Administraciones Territoriales durante los próximos años. Hora es ya de que nos preguntemos, como sugiriera Durkheim hace varias décadas, acerca de los lazos que unen a los hombres y, en especial, acerca de los valores y principios que nos unen a todos los ciudadanos y ciudadanas españoles en un Estado común, desde el respeto a las particularidades regionales o los hechos diferenciales que nos separan y nos enriquecen, pero con conciencia clara de nuestra pertenencia a una misma comunidad política que nos integra y nos hace a todos copartícipes de un mismo interés general.

En el orden económico, no parece que, con un proceso de territorialización del gasto público que sitúa a la Administración General del Estado en cotas cercanas al 50%, sea posible aumentar indefinidamente los recursos económicos de las administraciones autonómicas. Más ajustado a la realidad y más coherente con el principio de integración de todos los entes territoriales en un mismo Estado será seguir avanzando en las negociaciones para establecer fórmulas de corresponsabilidad fiscal. Cuestión que no debiéramos constreñir, como a veces se propugna, a una concreta propuesta en detrimento de otras posibles soluciones, probablemente más audaces desde la

perspectiva de la codecisión que debiera entrañar todo proceso de corresponsabilización en la asunción del coste político derivado de la política fiscal. Ni mucho menos podemos ignorar el principio de solidaridad trasladando al Estado la responsabilidad de una decisión que, por su impacto en la financiación de todas y cada una de las Comunidades Autónomas, ha de involucrar necesariamente a todas las administraciones autonómicas. Por tanto, no debe plantearse como resultado de una relación bilateral o, lo que es peor, como una promesa electoral cuyo cumplimiento no depende del partido que la propugna, sino del conjunto de agentes institucionales, Estado y Comunidades Autónomas, por ella afectados.

En el orden funcional, resulta claro que el Estado de las Autonomías puede ponerse en cuestión si el ejercicio de las respectivas esferas de poder, pero también de las competencias concurrentes, no resulta útil y eficaz para resolver las demandas y aspiraciones de los ciudadanos. La próxima entrada en vigor de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y, desde luego, el desarrollo del principio de cooperación, parte importantísima de los Acuerdos Autonómicos, constituyen pasos importantes para asegurar la funcionalidad del Estado en su conjunto y propiciar, al mismo tiempo, la modernización de nuestras respectivas administraciones en el servicio que prestan a los ciudadanos.

Este objetivo no podrá verse cumplido si se renuncia al compromiso cooperativo que se explicita en los Acuerdos de 1992 y se anteponen posiciones reivindicativas que ponen en cuestión la presencia de la Administración General del Estado en las Comunidades Autónomas, en defensa de un nuevo tipo de centralismo que resulta poco coherente con la estructura compleja de nuestro modelo constitucional.

Nunca el reparto competencial establecido en el bloque de la constitucionalidad puede constituir la causa de posibles duplicidades o ineficacias administrativas. Por el contrario, estas disfuncionalidades, cuando se producen, son consecuencia de una excesiva rigidez de las estructuras administrativas para adecuarse a las consecuencias de una distribución de competencias entre las diferentes Administraciones Públicas que acabamos de perfilar mediante el consenso alcanzado en febrero de 1992.

Desde luego que hay que modernizar nuestras Administraciones, dotando a la actuación administrativa de la eficacia y la eficiencia necesarias para asegurar servicios de creciente calidad al mínimo coste posible. Pero para ello, además de los proyectos concretos de mejora que ya se están desarrollando, al menos en el ámbito de la Administración del Estado, más nos valdría profundizar en la mutua lealtad y en el perfeccionamiento de los instrumentos de colaboración interadministrativa. Habría que desechar, por tanto, propuestas que, bajo el pretexto de una mayor eficacia, se traducirían en nuevos elementos de diferenciación entre las todavía llamadas por algunos comunidades históricas y el resto de las autonomías españolas y en una sensible pérdida de los elementos de cohesión política exigidos constitucionalmente por el Estado de las Autonomías.

Es hora, ciertamente, de perfeccionar el Estado y de dar nuevos pasos. No lo es, a mi juicio, de seguir buscando obsesivamente argumentos para reabrir el proceso autonómico con consecuencias negativas para la estabilidad que requiere un perfeccionamiento real y efectivo del Estado de las Autonomías.

El Estatuto de Castilla y León, a punto de ser reformado, cumple su décimo aniversario. Ignorante de los tópicos que se han atribuido a esta región y de las posiciones conservadoras que no le fueron proclives, ha evidenciado con su aplicación que la apuesta por el autogobierno en esta región estaba asegurada. Orientar las nuevas competencias, dirigiendo su desarrollo hacia la satisfacción de los intereses de la región, es su nuevo reto y, con toda seguridad, su concreta finalidad; pero también dirigiéndolo hacia la corresponsabilización de las instituciones autonómicas en la consecución del interés general de la nación española, mediante la cooperación con el resto de las Administraciones.

ETAPA PREAUTONOMICA

1977

15 de junio: primeras elecciones generales.
29 de septiembre: restablecimiento de la Generalitat de Cataluña.
31 de octubre: se constituye en Valladolid la Asamblea Regional de Parlamentarios con la intención de conseguir un régimen preautonómico para la región.

1978

4 de enero: preautonomía del País Vasco.
2 de junio: concesión por parte del Consejo de Ministros de la preautonomía para C-L.
30 de junio: promulgación del Real Decreto-Ley de Preautonomía de Castilla y León.
22 de julio: Monzón de Campos (Palencia): constitución del Consejo General de C-L. Incorpora las provincias de Avila, Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. Elegido presidente Juan Manuel Reol Tejada.
6 de diciembre: promulgación de la Constitución Española.



Diez años de autonomía: Quién sabe dónde

Francisco Barrasa

Aproximadamente a medio camino de la andadura autonómica de Castilla y León, un libro dedicado a la Economía de la Comunidad Autónoma y debido a la pluma de un profesor universitario de la materia llevó por decidido subtítulo «Nota para la crónica de una región que se esfuma».

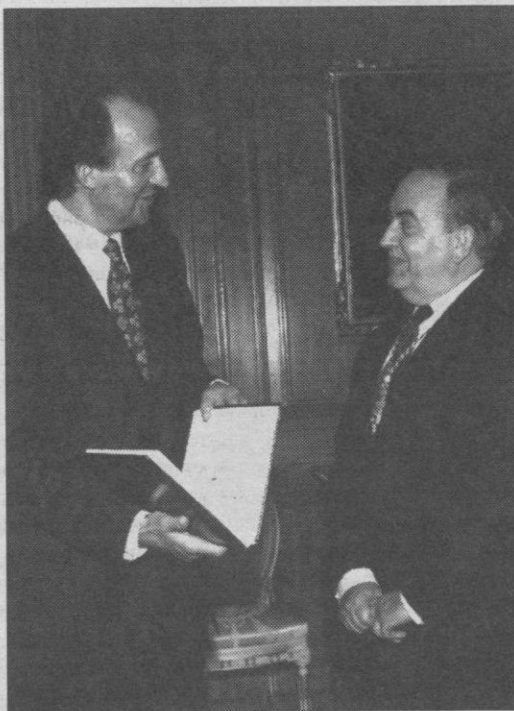
Era 1987, y Ramiro García Fernández, desde una posición crítica y denunciante —lo que no reduce su posibilidad de certeza—, establecía un diagnóstico que no ha sido contestado aún por la vía de los hechos. «En la medida que la inmensa mayoría de los factores que imposibilitan el desarrollo de esta región son comunes a otras —concluía—, sería ridículo pensar que el ámbito de organización idóneo es el regional». No se trataba de la negación al principio político-territorial que rige el Estado, sino la desconfianza sobre su operatividad en este inmenso terruño. Pero tal postura no es compartida por la nutrida nómina política que ha dado vida desde 1983 a la Junta y a las Cortes, en cuyo discurso se da por hecho que el progreso no necesita de



otros «input» que la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad y el pluralismo.

En este juego tan plural de opiniones sobre una misma realidad —el presente y el futuro de los habitantes de la región—, no siempre rigen las apariencias ideológicas. A lo expresado por García Fernández desde una posición asumible por el sindicato de clase CC.OO., se parece bastante lo que hace un año escribía de su puño y letra Juan Manuel Reol Tejada, el primer presidente del Consejo General de Castilla y León entre 1978 y 1980. «Creo —dice el que fuera dirigente de la UCD— que falta ilusión colectiva, que no existen liderazgos personales e institucionales a la altura de los desafíos, que impera una filosofía de victimismo y resignación, y que no existe la urdimbre suficiente entre nuestras gentes y los políticos... Que en definitiva, la sociedad civil castellano-leonesa no tiene clarificadas sus metas ni un proyecto de futuro».

Frente a esta coincidencia de pareceres desde bases ideológicas muy distintas, algunos como Demetrio



Han pasado 10 años desde que Castilla y León comenzó su etapa autonómica en Monzón de Campos con Daniel de Fernández presidiendo la mesa de la Asamblea de Parlamentarios y García Verdugo como responsable del Consejo General de Castilla y León - marzo 83- (arriba, izquierda), que se vio continuada por la sesión de las primeras Cortes que invitaron a Demetrio Madrid como presidente de la Junta -23 de mayo 83- (arriba, derecha), hasta la entrega del Estatuto al Rey por el presidente de las Cortes actuales, Manuel Estella, que tuvo lugar hace unos días.

Madrid, representante popular por el PSOE desde la etapa preautonómica y primer presidente de la Junta, han llevado su optimismo sobre

el significado del autogobierno al punto de proclamar hace diez meses que «hemos pasado de una organización centralista a la España

de las autonomías, cuasi-federal». Al veterano político zamorano siempre le ha caracterizado su entusiasmo, por más que estuviera reñido con la realidad, y a pesar de que el Estatuto de Autonomía deja bien clara la subsidiariedad de Castilla y León respecto al Estado en materia de organización económica, repitió durante años en sus discursos ante las Cortes el objetivo de «alcanzar un desarrollo autocentrado de la Economía castellano-leonesa, una movilización de los recursos humanos y materiales que se sostenga por sus propios medios en el mercado».

El pecado de omisión

La Asamblea Regional de Cámaras de Comercio e Industria de Castilla y León, creada en 1988 como foro de debate de las 14 existentes en la Comunidad Autónoma, promovió inmediatamente la realización de un estudio sobre el estado económico del territorio, que fue dirigido por Antonio Bustos Gisbert, catedrático de la Universidad de Salamanca. El epílogo a sus 14 conclusiones pesimistas es un epígrafe en el que los redactores contestan implícitamente a Demetrio Madrid, José María Aznar y Juan José Lucas —y algo menos a la prudencia de Jesús Posada Moreno—, al afirmar que «nada se gana disfrazando realidades o haciendo que los números oculten lo que sucede en una sociedad», al mismo tiempo que realizan una apelación popular que los sucesivos presidentes de la Junta siempre eludieron. «Tal vez el mensaje más importante que debe llegarle al lector —señalan— es que su concurso es tan

Pasa a la página siguiente

Ahora es el momento .

Antes que sea tarde, venga y súpese a las más de 40 empresas que nos han elegido.
1º Fase acabada y 2º Fase en plena realización.

Porque aquí su empresa contará con todo lo necesario para crecer.

Así es el Polígono Industrial de La Mora:

■ Una superficie de 561.438 m². ■ A cuatro km. de Valladolid, en La Cistérniga ■ Diseñado con una parcelación flexible. ■ Naves Nido de 300 m² ■ Viales asfaltados y alumbrado público. ■ 56.845 m² de zonas verdes. Tenis y piscina. ■ Hotel, restaurantes y guardería. ■ Estación de servicio y taller mecánico. ■ Naves nido de 300 m².

Estas son algunas de las extraordinarias dotaciones que hacen de La Mora un Polígono fuera de lo normal.

Un Polígono Superdotado. Elíjalo también Ud. Ahora está a tiempo.

Financiado por:
Caja España

EMPRESA CONSTRUCTORA
ALEJANDRO BOLADO



POLIGONO INDUSTRIAL
LA MORA

Un Polígono Superdotado.

Para su información y venta, diríjase a nuestra Oficina en el Paseo Zorrilla, 48, 2º. de Valladolid o llámenos al (983) 33 34 44.

ETAPA PREAUTONOMICA



1979

9 de junio: remodelación del Pleno del Consejo. Reección de Juan Manuel Reol Tejada como presidente del Consejo General de Castilla y León.

Octubre: tras la retirada indefinida del Consejo General de los parlamentarios segovianos de UCD, municipios y Diputación de Segovia omiten adoptar los acuerdos para integrarse en el proceso autonómico de Castilla y León.

26 de octubre: acuerdo Consejo General-Diputaciones para iniciar el proceso autonómico por la vía ordinaria (ART. 143-2 de la Constitución Española).

1980

Nueva incorporación de Segovia al Consejo General.

12 de julio: Palencia: Pleno del Consejo. Elección como presidente de José Manuel García-Verdugo.

13 de julio: incorporación de la provincia de León al Consejo General.

DIEZ AÑOS DE AUTONOMIA:
QUIEN SABE DONDE

Viene de la página anterior

necesario como el de cualquier otro para que las posibilidades de desarrollo de nuestra región no queden sólo en proyecto».

En diciembre de 1992, la misma entidad empresarial remitía al Consejo Superior de Cámaras un sucinto informe según el cual, «los indicadores disponibles permiten confirmar la importante desaceleración de la actividad económica que en 1992 ha sufrido Castilla y León, y que revela la fragilidad del modelo económico regional una vez que los últimos comportamientos financieros de la economía española han puesto fin a una etapa de crecimiento sustentada en el flujo espectacular de recursos exteriores y en la expansión del gasto corriente del Estado.

Lírica y economía

La desconexión entre el diagnóstico de los empresarios y el discurso de los políticos—convertido en moneda corriente entre 1983 y 1993 en Castilla y León— se producía una vez más con ese informe de las Cámaras, redactado sólo dos meses después de que el actual presidente de la Junta, Juan José Lucas, se dirigiera a las Cortes regionales en el Debate sobre Política General proponiendo soluciones a los problemas de sus conciudadanos desde un tono lírico-histórico del que se deduce que su alimentación depende más del amor que profesan a la libertad que de lo reflejado cada año en la Renta Nacional de España.

En el marco característico de unas intervenciones ante el Parlamento regional que no parecen haber bebido desde 1983 en publicaciones económicas, Lucas citó a Manuel Azaña para identificar a Castilla con España; reconoció que el desarrollo de la región no sólo es subsidiario



Los castellano-leoneses claman en Villalar por un Estatuto en la etapa preautonómica. SANTIAGO

La desconexión entre el diagnóstico de los empresarios y el discurso de los políticos ha sido una constante en estos diez años

del nacional sino del internacional, pero apuntó a su Gobierno como capaz de dinamizar la situación en un período de cuatro años; cifró el futuro productivo del territorio en la industria, y páginas adelante incluyó el dato de que el 97 por ciento de las empresas de la Comunidad son pymes. Al referirse a qué ofrece hoy Castilla y León—aunque no precisó si a posibles inversores—, cifró nuestra potencialidad en «el amor a la libertad, un profundo sentido

democrático, un hondo talante de diálogo, un probado sentido de generosidad y solidaridad, un alto nivel educativo y una lengua que fecundó intelectualmente a medio mundo».

Diez años de intenciones

Con anterioridad (1985), y casi recién llegado a la responsabilidad de Gobierno, el pionero Demetrio Madrid había llegado a dar por hecho ante las Cortes de Castilla y León el «desarrollo autocentrado de la economía castellano-leonesa», cuyo fruto era tan previsible que se hacía necesario «aumentar la calidad de vida de la población para evitar que un relanzamiento de la economía suponga también un relanzamiento de la sobreurbanización».

A la postre, la bondad de carácter de aquel primer presidente de la Junta abrió camino para sí mismo y para sus sucesores, a la hora de ser juzgados por la Historia. Desde el púlpito de oradores del hemiciclo de Fuen-

saldaña lanzó hace siete años una proclama tan sencilla como eficaz, «Sé—dijo—, que aquellos que se ocultan a sí mismos la realidad van a continuar afirmando que la Junta no ha realizado una buena gestión, y que alguno querrá oscurecer la labor de Gobierno aduciendo como prueba la persistencia de una carretera en mal estado, de un consultorio local inadecuado, o de un funcionario impertinente, como si esto pudiera empañar los logros alcanzados por este Gobierno».

Con esta carta de presentación hacia la eternidad, el propio Madrid sigue siendo representante del pueblo en estas latitudes; José María Aznar se licenció en gobernación para optar al inquilinato de La Moncloa; Jesús Posada permanece confinado como Senador por la Comunidad Autónoma; y Juan José Lucas lucha denodadamente por conseguir que al menos la mitad más uno de los habitantes de la región asocien su nombre, su fotografía y su cargo.

Tres disidencias territoriales

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobado por las Cortes Generales de España el 25 de febrero de 1983, quedó publicado en el BOE—y por tanto entró en vigor— seis días más tarde, compartiendo espacio en el diario oficial con otra Ley Orgánica que incorporaba a Segovia a esta Comunidad Autónoma, «por razones de interés nacional». Año y medio después, el Tribunal Constitucional ratificaba que tanto la provincia segoviana como la de León formaban parte de la región administrativa por las mismas razones—«antiguos reinos que han mantenido a lo largo de los siglos una identidad histórica y cultural claramente definida»—, siendo necesario esperar hasta julio de 1986 para que el alto tribunal dejara establecido que el Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón, físicamente situados en Alava, se-

guía perteneciendo al territorio provincial de Burgos porque sus habitantes no se habían vuelto atrás de la decisión tomada por sus ancestros cinco siglos antes.

El nacimiento de la Comunidad Autónoma de Castilla y León se produjo pues con el fondo de dos tipos de reclamaciones sobre su superficie: las llegadas desde tierras leonesas y segovianas indicando que ambas provincias tenían entidad histórica suficiente para constituirse en autonomías uniprovinciales, y la del Gobierno Vasco que pidió la convocatoria de un referéndum en el enclave burgalés de Alava para dirimir su futuro. El Tribunal Constitucional prácticamente repitió argumentos para rechazar la presunta inconstitucionalidad aducida por los dos primeros recurrentes, pero en el caso de Treviño y Arganzón—cu-

yos ayuntamientos habían decidido en 1980 agregarse al territorio alavés— hubo incluso un voto particular del magistrado Jesús Laguna Villa considerando que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León vulnera al País Vasco, aprobado años antes, en la cuestión a debate.

Con su delimitación no alterada desde hace una década, rige en el territorio un texto según el cual, «Castilla y León consciente de su significado histórico, confía en que el presente Estatuto conduzca a sus hombres y a sus tierras hacia metas elevadas de progreso social, económico y cultural, y contribuya a la corrección progresiva de sus propios desequilibrios internos». Los ciudadanos saben ya a estas alturas si tan elevada intención se ha cumplido en todo, en parte o en nada.

Réquiem por la burguesía autonomista

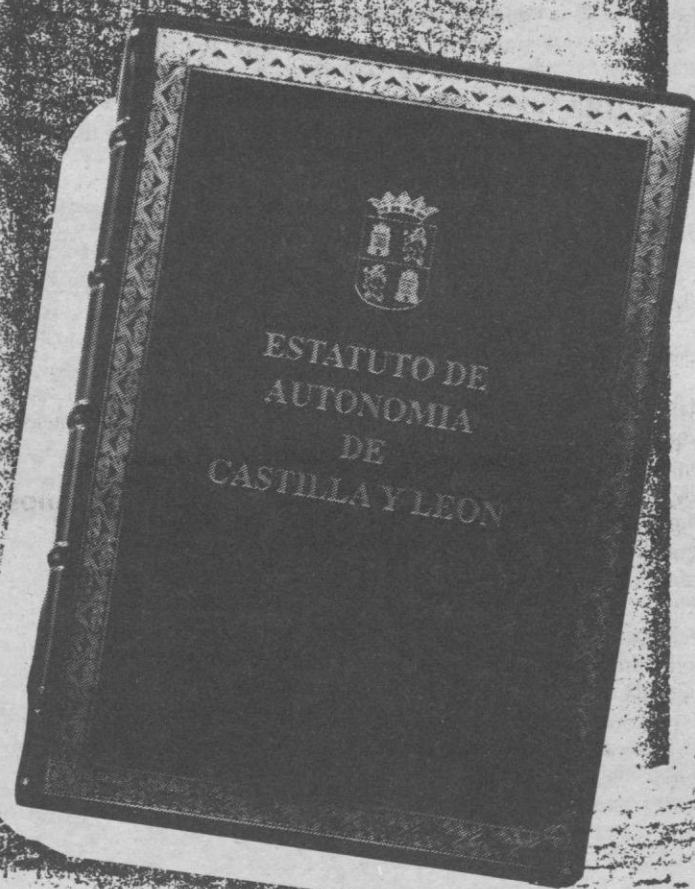
En la historia contemporánea de España, las dos apelaciones más nítidas y apasionadas a una organización de autogobierno para Castilla y León estuvieron vinculadas a la supervivencia en el ámbito económico, e impulsadas por una burguesía—harinera, pero también industrial— entonces protagonista en las instituciones políticas y desde hace medio siglo inactiva a efectos «nacionalistas».

A finales del siglo XIX, el periódico El Norte de Castilla comenzó a ser bandera de los intereses agrarios de este gran predio cerealista, con sustento ideológico en propuestas de reputados intelectuales como Macías Pica-vea o Gumersindo de Azcárate. Consecuencia de ese ambiente, en 1918 la ciudad de Burgos acogió una reunión de representantes de las diputaciones de las provincias castellano-leonesas, de la que emanó el llamado «Mensaje de Castilla», primer documento regionalista en sentido estricto que pretendía ser la réplica a la creación de la Mancomunidad de Cataluña en cuanto que el pasado institucional había preñado tanto o más a la Cuenca del Duero de tradiciones de Gobierno y capacidad para regir su destino.

Pero fue durante la II República cuando los parlamentarios y los regidores de las diputaciones de este territorio plantearon con más virulencia el rechazo a una «vía lenta» respecto a los Estatutos de Autonomía para Cataluña, País Vasco y Galicia, llegando a elaborar las bases de uno propio. En los documentos de trabajo siempre se aludía a todo el territorio que desde 1983 compone la Comunidad Autónoma, amén de Santander y Logroño, con la particularidad de que la provincia más al noroeste era valedora de la iniciativa. El editorial de Diario de León del 20 de mayo de 1936 afirmaba que era preciso «unir en una personalidad a León y Castilla la Vieja en torno a la gran cuenca del Duero, sin caer ahora en rivalidades pueblerinas».

10^o

Aniversario Del Estatuto De Autonomía



*Diez años de trabajo compartido,
de esfuerzo amasado entre todos,
abriendo brecha en un presente que nos permita
edificar y construir un futuro ilusionado y esperanzado.
Un presente hecho de progreso minuto a minuto; un futuro
para todos renovado día a día.*

*Diez Años...
Construyendo, Todos Juntos,
Un Universo: CASTILLA Y LEON*



CORTES
DE
CASTILLA Y LEON

ETAPA PREAUTONOMICA



1981

Firma de los Pactos Autonómicos.

27 de junio: presentación del primer proyecto de Estatuto de Autonomía.**29 de julio:** entrega a los presidentes del Senado y el Congreso del Proyecto de Estatuto de Autonomía.

1982

El Gobierno de Calvo Sotelo paraliza la tramitación parlamentaria del proyecto de Estatuto y lo pospone para después del verano; intento fallido por la disolución de las Cámaras.

28 de octubre: elecciones generales. El PSOE obtiene mayoría absoluta.

Las nuevas competencias se hacen de rogar

El complejo proceso de transferencias continúa sin concretarse un año después de la firma del pacto autonómico

Víctor Iriarte

La transferencia de las 28 nuevas competencias a Castilla y León acordadas en virtud del pacto autonómico firmado hace ahora justamente un año es todavía una ilusión.

El ministro para las Administraciones Públicas, Juan Manuel Eguiaray, concretó por primera vez el pasado 11 de febrero al consejero de Presidencia de la Junta, César Huidobro, la fecha en que las autonomías de «vía lenta» recibirán un primer bloque de materias para gestionar: «antes del verano». Es lo más ajustado que ha podido ofrecer el máximo responsable del proceso, que todavía no tiene esbozado el calendario de la negociación.

De momento, lo único que se sabe con seguridad es que tras la aprobación el pasado 23 de diciembre de 1992 de la Ley Orgánica de Transferencia y el nuevo pacto PP-PSOE para armonizar el proceso, los estatutos de autonomía estarán reformados por las Cámaras regionales y serán remitidos antes del 10 de abril a las Cortes Generales para su ratificación. Está claro que las 28 nuevas competencias pertenecen «de iure» a las comunidades autónomas, pero mucho más que se hacen de rogar.

El máximo representante de Castilla y León en la Comisión Mixta de Transferencias, el procurador del PP Javier León de la Riva, espera que antes del verano la Junta gestione todas las competencias que no requieran el traspaso de funcionarios, medios materiales como locales o determinadas consignaciones presupuestarias. Entre ellas, las relativas a la capacidad de desarrollo legislativo en materia de Trabajo, corporaciones de derecho público, defensa del consumidor y usuario, normas adicionales de protección del medio ambiente o las competencias exclusivas en

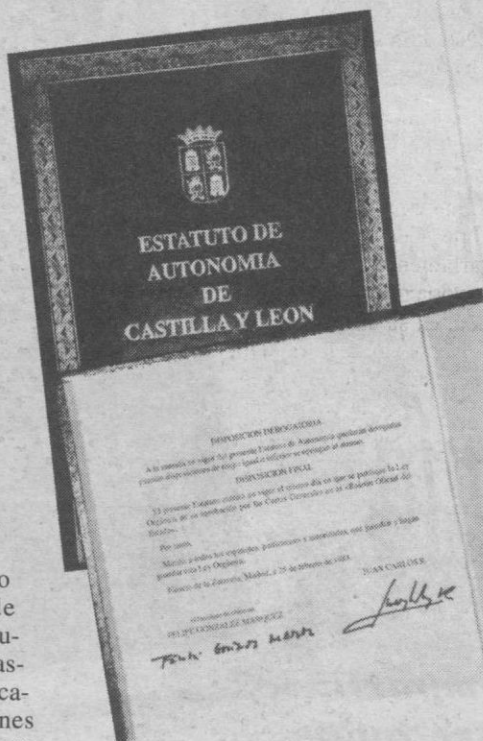
estadística, fundaciones, procedimiento administrativo o publicidad. La competencia en denominaciones de origen, que los ponentes del Estatuto «olvidaron» redactar hace diez años, ya ha sido solicitada formalmente y se incluirá en el paquete de las «inmediatas».

Un segundo bloque de competencias, que exigirá una negociación más intensa para delimitar su alcance y contenido, podrá ser transferido a finales de año o comienzos del siguiente y estará formado por la gestión de casinos, juegos y apuestas, servicio meteorológico, instalaciones de producción y transporte de energía y prensa, radio y televisión, entre otras.

Finalmente, el proceso se completará antes de concluir la actual legislatura autonómica con el traspaso del Inersro, la Educación o las confederaciones hidrográficas, materias para las que se prevé una dura y conflictiva negociación.

A la espera de la aprobación de la Ley de Transferencias, hecho que se produjo el pasado 23 de diciembre de 1992, los 8 representantes de Castilla y León en la Comisión Mixta (4 del PP, 2 del PSOE, 1 del CDS y 1 de IU) han mantenido dos reuniones para analizar el acoplamiento de

las nuevas competencias a la actual configuración del Gobierno regional y han pedido a la Junta que cree unas ponencias o grupos de trabajo en cada Consejería que valore y analice cada materia



concreta que va a recibir. La reunión de la Comisión Mixta, incluidos los ocho representantes del Gobierno central, todavía no se ha producido ni tiene fecha.

Reforma estatutaria

La reforma del Estatuto será efectiva con la incorporación a este texto del contenido de la Ley

Orgánica y la modificación de los artículos 26 al 29, que en su nueva redacción recogerán las competencias pactadas. La aplastante mayoría de procuradores del PP y del PSOE en la Cámara regional permitirá aprobar el texto antes del 10 de abril, fecha acordada por las direcciones nacionales de ambos partidos para su remisión a las Cortes Generales, que refrendarán los acuerdos de las diez autonomías de «vía lenta».

Curiosamente, el texto pactado por los dos grandes partidos nacionales ha incluido una nueva competencia, relacionada con la administración de justicia no militar, que no se incluyó en el pacto autonómico ni en la Ley de Transferencia, y que permitirá ejercer las competencias asignadas al Gobierno central en las leyes orgánicas del poder judicial, así como delimitar las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales.

Esta nueva competencia, que se incluirá en el artículo 24 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, ha sido copiada del estatuto catalán. Jesús Quijano, miembro del PSOE en la Comisión Mixta, considera que se le ha dado «más importancia de la que tiene», ya que pretende seguir un mandato que está recogido en la Constitución y que aclara para todas las regiones la jurisprudencia que ha sentado el Tribunal Constitucional.

Tanto Quijano como León de la Riva consideran que en el futuro la Junta podría desempeñar las gerencias de Justicia, pero los juristas consultados por ICAL han señalado que se trata de la copia de un estatuto anterior a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que reinterpretó un «exceso jurídico» que luego no se ha llevado a la práctica.

Será la competencia número 29 y viene a demostrar que el desarrollo competencial todavía encuentra cauces por los que discurrir y que puede dar lugar a nuevas transferencias en los próximos años.

Matices

Artículo único? La incorporación de las nuevas competencias al Estatuto de Autonomía según el proyecto entregado en las Cortes el pasado 12 de febrero no respetará estrictamente el «artículo único» que marcaba el pacto. Según Javier León, en vez de incorporar al Estatuto una simple disposición adicional que haga referencia a la Ley de 23 de diciembre, se vacía ésta de contenido para impedir que las nuevas competencias sean suprimidas en una hipotética modificación de la Ley. La opción elegida prevé modificar y ampliar la redacción de los artículos 24 al 29, lo que obligaría a una negociación Junta-Gobierno central antes de aplicar cualquier restricción al contenido de la competencia. Además, el Estatuto mantiene su actual ordenación y evitar la pérdida de claridad que supondría la incorporación de un nuevo texto.

Matices expansivos. La no inclusión de la enmienda adicional con toda la Ley de 23 de diciembre hará que no se incorporen al Estatuto las matizaciones al contenido real de cada competencia recogidas en el capítulo II que se incluyeron en el pacto y que limitan extraordinariamente su ejercicio. Aunque los acuerdos entre el PSOE y el PP parecen claros, los juristas piensan que la no inclusión de las excepciones a cada nueva competencia puede tener en el futuro efectos jurídicos que podrían dar lugar a «pequeños matices expansivos».

Proceso abierto. La propuesta de modificación estatutaria presentada por PP y PSOE en Fuensaldaña mantiene la redacción del artículo 29, que preveía la incorporación de nuevas competencias a la autonomía de «vía lenta» una vez transcurridos los cinco años de entrada en vigor de la Ley. Jesús Quijano subraya que es la prueba manifiesta de que «nadie ha dado por cerrado definitivamente el proceso, sino que el pacto se ha limitado a ultimar el desarrollo del Título VIII de la Constitución». El dirigente socialista considera que el artículo 29 contradice «los argumentos que algunos han querido utilizar contra el pacto, porque nadie va a poner siete candados y el cierre definitivo seguramente no lo veremos nosotros ni nuestros nietos».



El presidente Lucas con el ministro Eguiaray.

El proceso se completará antes de concluir la actual legislatura con el traspaso del Inersro, la Educación o las confederaciones hidrográficas

ETAPA AUTONOMICA

1983

22 de febrero: aprobación definitiva en el Congreso del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. **4 de marzo:** Daniel de Fernando es elegido en Monzón de Campos presidente de la Mesa Provisional de la Asamblea. **8 de mayo:** Elecciones Autonómicas. **21 de mayo:** constitución en Tordesillas (capilla de Las Claras) de las Cortes de Castilla y León. Dionisio Llamazares es elegido presidente. **23 de mayo:** Demetrio Madrid es elegido presidente de la Junta de Castilla y León. **3 de junio:** toma de posesión del Gobierno Regional en Burgos (Palacio de la Isla). **6 de julio:** las Cortes regionales fijan su sede en Fuensaldaña (Valladolid).

1984

28 de septiembre: el Tribunal Constitucional confirma la permanencia de la provincia de León en la Comunidad de Castilla y León. **8 de noviembre:** sentencia del Tribunal Constitucional confirmando la integración de la provincia de Segovia en la Comunidad Autónoma.



El "Oidor" de los castellano-leoneses

Las Cortes regionales promoverán el día 25 la creación del Defensor del Ciudadano

María R. Mayor



La sesión institucional del 25 de febrero, con la que las Cortes

regionales van a conmemorar el X Aniversario del Estatuto de Autonomía, servirá también para dar el primer paso en la creación, en la Comunidad, de la institución del Defensor del Pueblo.

Esta figura, existente en el Estado desde 1982 y a partir de distintas fechas en siete comunidades autónomas, tiene como función primordial la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos frente a las Administraciones públicas.

La iniciativa que aprobará el Parlamento regional consistirá en instar a la Junta a elaborar el correspondiente proyecto de Ley para crear la nueva institución, cuya existencia permitirá a los castellano-leoneses tener un interlocutor independiente a quien exponer sus quejas sobre la Administración, y con amplias facultades para supervisar la actividad de los órganos administrativos de la Comunidad.

La denominación con la que se le reconozca puede ser la de Defensor del Ciudadano —por la que se inclina el portavoz socialista, Jesús Quijano—, aunque Javier León de la Riva, portavoz popular, no descarta la adopción del término «Oidor», con el que se conocía a los funcionarios de las chancillerías que atendían los asuntos civiles en las épocas medieval y moderna.

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en contra de lo que ocurre en otras Comunidades, no recoge la institución del Defensor del Pueblo, aunque ello no supone inconveniente para proceder a su creación, según dictamina un informe de los Servicios Jurídicos del Parlamento regional, de 1984, y la doctrina del Tribunal Constitucional.

La fecha del informe jurídico corresponde a la primera legislatura

autonómica, en la que los grupos políticos estudiaron la posibilidad de crear la institución del Defensor del Pueblo. La iniciativa, sin embargo, quedó en papel mojado y los intentos del anterior presidente de las Cortes regionales, Carlos Sánchez Reyes, para sacar adelante una fórmula intermedia —consistente en que la Mesa del Parlamento regional y el propio presidente fueran receptores de las quejas ciudadanas— tampoco tuvieron suficiente eco entre los parlamentarios.

La fórmula de Sánchez Reyes hubiera permitido a los ciudadanos disponer de un interlocutor ante el que exponer sus quejas, pero no garantizaba la plena independencia que caracteriza al Defensor del Pueblo frente a los poderes públicos. De hecho, la Ley Orgánica que regula esta institución, promulgada en abril de 1981, determina que su titular «no estará sujeto a mandato imperativo alguno; no recibirá instrucciones de ninguna autoridad y desempeñará sus funciones con autonomía y según su criterio». También se garantiza la inviolabilidad del Defensor del Pueblo y, de otro lado, se establece

El Estatuto no contempla esta institución, lo que no es óbice para que sea creada

como requisito para desempeñar el cargo la desvinculación de todo mandato representativo, de partidos políticos, sindicatos o asociaciones, e incluso de cualquier actividad profesional, liberal mercantil o laboral.

El Defensor del Pueblo mantiene, sin embargo, una clara vinculación con el poder legislativo, por cuanto el propio texto normativo lo define como «comisionado de las Cortes Generales» y corresponde al Parlamento su designación —por mayoría de tres quintos—, y revocación, en su caso; la aprobación del presupuesto, y la relación se mantiene tanto por la vía de una determinada comisión parlamentaria, como en el Pleno, ante el que el Defensor

del Pueblo presenta su informe anual.

Organo de control

El principal rasgo definitorio del Defensor del Pueblo es el de constituir un órgano de control de la Administración en defensa de las libertades y derechos de los ciudadanos. Para asegurar esta función, se establece en la legislación el acceso directo y gratuito a la institución con la única condición de invocar un interés legítimo.

La Ley Orgánica antes señalada, al igual que las promulgadas en las Comunidades autónomas que disponen de figuras similares, indica que no podrán constituir impedimento para acceder al Defensor del Pueblo «la nacionalidad, residencia, sexo, minoría de edad, la incapacidad legal, el internamiento en un centro penitenciario o de reclusión o, en general, cualquier relación especial de sujeción o dependencia de una Administración o Poder Público». También podrán solicitar la intervención del Defensor del Pueblo los parlamentos nacionales —o regio-

nales en el ámbito autonómico— y en algunas Comunidades, como Aragón, los ayuntamientos.

Una vez admitida una queja, el Defensor promueve una investigación ante el órgano o dependencia administrativa que corresponda, que estará obligada a auxiliarle «con carácter preferente y urgente». Esta libertad de acceso a la información llega hasta el punto de que la institución podrá «solicitar a los poderes públicos todos los documentos que considere necesarios para el desarrollo de su función, incluidos aquellos clasificados con el carácter de secretos de acuerdo con la ley». Este primer paso se acompaña, al término de la investigación, de recomendaciones a los órganos objeto de la queja para que corrijan sus criterios de actuación.

La capacidad y libertad de actuación del Defensor del Pueblo no resulta tan efectiva en la práctica y es frecuente encontrar en los informes anuales que ha presentado la institución numerosas quejas a la actuación obstruccionista de funcionarios o responsables de las Administraciones públicas.



Los castellano-leoneses contarán con una institución propia a la que presentar sus quejas contra la Administración.

SANTIAGO

El «Ombudsman», precedente moderno del Defensor del Pueblo

Aunque algunas instituciones de la época medieval guardan ciertas similitudes con el Defensor del Pueblo, en especial el Justicia de Aragón, el precedente moderno tiene su origen en Suecia.

El «Ombudsman» sueco aparece vinculado al tránsito de la Monarquía absoluta al constitucionalismo y al propósito de las fuerzas sociales representadas en el Parlamento de controlar a los funcionarios regios durante los periodos que transcurrían entre las reuniones de las Cámaras.

En el resto de Europa, la institución no

nace hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ya que es a partir de entonces cuando se produce una profunda transformación del papel del Estado en relación a la sociedad civil y al sistema de protección de las libertades públicas.

La Ley del Defensor del Pueblo Vasco —el Ararteko— indica en su extensa exposición de motivos que, a partir de la II Guerra Mundial, los poderes públicos adoptan una actitud más interventora en la actividad de los ciudadanos, reforzando las relaciones de dependencia con la Administración. Esta situación tuvo como efecto que los sistemas de control tra-

dicionales para hacer frente a situaciones de mala administración parecieran insuficientes e inadecuados, a lo que se suma el recelo ciudadano a los burocráticos procedimientos de la Administración pública.

La institución del «Ombudsman» se extendió por Europa durante la postguerra y llegó de forma más tardía a España, donde aparece por primera vez en la Constitución de 1978. En el sistema español, las legislaciones estatal y autonómicas que regulan la existencia y funciones de esta institución, mantienen en general, y en términos similares, los rasgos esenciales que caracterizan al «Ombudsman».

La estructura territorial de la Comunidad, el sentimiento regional, la génesis del Estatuto y los retos planteados con la reforma y el pacto autonómico, fueron algunos de los temas plan-

teados en la mesa redonda organizada por ICAL en la que participaron los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios en las Cortes. Al margen de los criterios partidarios, todos coinciden en que la próxima reforma no cie-

Que diez años

Los portavoces de los grupos parlamentarios en las Cortes

C. L. del Ser/M. R. Mayor

Si al portavoz del PSOE, Jesús Quijano, le dicen hace diez años que Castilla y León tendría el nivel de competencias actual, no se lo hubiera creído. «Hemos evolucionado hasta lo impensable, después de un proceso de gestación tan tormentoso, discutido y lento como el nuestro», señala. «Nuestro Estatuto fue el último en ser aprobado, y lo fue en condiciones excepcionales y sin la provincia de Segovia, incorporada por una ley especial después de una sentencia del Tribunal Supremo».

Javier León de la Riva, portavoz del PP, coincide con Quijano en la excepcionalidad del acceso a la autonomía, que se produjo después de una «gestación de riesgos», condicionada por la fuerte tradición provincial, por la dispersión demográfica, el fuerte peso agrario y la resistencia a integrarse en una nueva entidad territorial.

«Diez años no es nada», dice un viejo tango porteño. Diez años tampoco es mucho en la reorganización de la estructura territorial de un Estado que lleva 500 años de centralismo. Visto el proceso en el conjunto del Estado—apunta Quijano—el caso de Castilla y León es aún más espectacular. Hay Estados, como Italia, que en medio siglo no han alcanzado la décima parte de lo conseguido en España.

Las dificultades originarias contrastan con la celeridad en el afianzamiento y estabilidad de la Comunidad. Y esto, a pesar de la cautela estatutaria de los cinco años, que para el portavoz centrista Daniel de Fernando aseguraba el mismo nivel competencial para todas las comunidades autónomas. «Los que participamos en aquel proceso manteníamos la esperanza de los cinco años, pero ha faltado el consenso que se dio en la redacción del Título VIII de la Constitución». «Ahora que el modelo ha calado en la ciudadanía se produce un frenazo, por la falta de consenso sobre la reforma estatutaria», afirma.

La marcha actual del Estado de las Autonomías no es para vanagloriarse, matiza Herreros, representante de IU y portavoz del Grupo Mixto. Los condicionantes iniciales han lastimado el desarrollo autonómico. La pretendida reforma del Estatuto se queda—dice Herreros—en «un intento frustrado de redondeamiento del Título VIII de la Constitución». «No nos han dejado avanzar», y esa es la causa de que estemos entre las diez comunidades de tercera, que Herreros denomina «anhistóricas», en contraposición con las cuatro «his-

tóricas» y las tres «mesohistóricas» (Canarias, Valencia y Navarra).

En lo de las velocidades nos gustaría haber avanzado más, señala León de la Riva. Dos iniciativas aprobadas en las Cortes la pasada legislatura—la transferencia de Educación y la propuesta de reforma del Estatuto—, no prosperaron en el Congreso de los Diputados, recuerda el portavoz del PP.

Reforma sin consenso

De Fernando recalca también esta falta de voluntad política de consenso desde el Gobierno para afrontar la reforma estatutaria, que conlleva un frenazo en las aspiraciones de alcanzar el mismo techo competencial que disfrutaban otras comunidades.

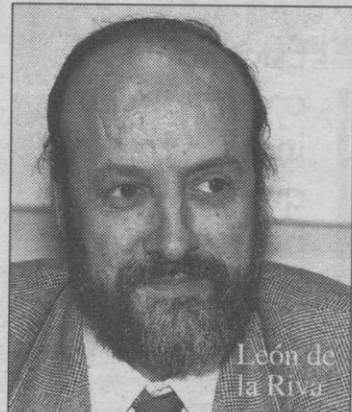
En Castilla y León—indica Herreros—se han alzado ya voces para salir de esta situación injusta en el proceso histórico y recuerda que aquí se produjeron manifestaciones multitudinarias, como la de Valladolid previa a la aprobación del Estatuto de Autonomía. Interferencias y disfuncionalidades nos han visto inmersos en una vía lenta, apelando a razones de Estado y a problemas de estabilidad nacional.

Quijano no quiere que se achacen a su partido responsabilidades que corresponden a UCD, que gobernó en la etapa preautonómica y propició el primer pacto autonómico. «No debemos utilizar un proceso autonómico tan peculiar como el nuestro como arma arrojadiza entre grupos», apunta Quijano, que busca razones en la propia historia para diseñar un modelo territorial tan complejo, que no fuera el federal, «por los malos recuerdos que traía». El modelo autonómico «está desvaído» y necesita concreción, como la reconversión que experimentó el proceso después del 23-F, asevera el portavoz socialista.

Sólo PP y PSOE

El pacto autonómico actual, suscrita sólo por PP y PSOE, supone para Quijano un avance enorme en el proceso, impensable hace diez años, sin olvidar que la estructura territorial necesita tiempo para afianzarse. De Fernando rechaza el pacto actual, del que su partido fue excluido, y vuelve a la cautela de los cinco años. «No queríamos que hubiese Estado federal, pero si queríamos que las competencias fuesen iguales al cabo de los cinco años».

Tampoco comparte De Fernando que con esta reforma se culmine el proceso autonómico y se cierre el Título VIII de la Constitución. De Fernando cita las comunidades de Valencia y Canarias que no necesitaron reformar sus estatutos para asu-



«Fue una gestación de riesgo, condicionada por la fuerte tradición provincial»



«No nos han dejado avanzar y esa es la causa de que estemos entre las 10 comunidades de tercera»



«Hemos evolucionado hasta lo impensable, tras una gestación tan tormentosa»



«Los que estuvimos en aquel proceso mantuvimos la esperanza de igualarnos a los demás»

mir nuevas competencias. ¿Para qué la reforma?, se pregunta el portavoz centrista. Y responde: «Para implicar a las Cortes de Castilla y León y decir que han aceptado ser una Comunidad de segunda categoría toda su vida».

Sobre este punto León de la Riva se muestra rotundo. «Para el PP no está cerrado el Título VIII de la Constitución, ni el Pacto Autonómico culmina el proceso de desarrollo autonómico». «Después de estar tres años o cuatro llorando el desarrollo del Estatuto y más competencias, hemos llegado a la conclusión de que por esa vía no se consigue absolutamente nada mientras la mayoría en Madrid diga no», arguye León de la Riva. «Es preferible seguir pidiendo todo para que no se nos dé nada o es mejor pedir lo que están dispuestos a dar?», pregunta el portavoz del PP. «Porque aquí—continúa—quien tiene la llave es el PSOE, que se ha opuesto al desarrollo autonómico, al margen de la opinión de los socialistas de Castilla y León».

Herreros teme que el Pacto Autonómico y la Ley de Transferencias cierren el proceso autonómico, a pesar de las interpretaciones del PP y PSOE en sentido contrario. «Nos gustaría que no fuese así, pero ¿qué significa «última» el Título VIII de la Constitución?». El portavoz de IU se resiste a aceptar la actual clasificación de las comunidades históricas, «porque consagramos la desigualdad». Tampoco admite que se esgriman razones

Localismos

La de los provincianismos es una bandera distinta. Su origen está en el reparto de las inversiones públicas. Ni siquiera los procuradores regionales están libres de este pecado y a veces se enfadan cuando se les recrimina su empeño en llevar a las Cortes iniciativas provincianas. Da la sensación—asegura León de la Riva—de que aquí se piensa primero en burgales o zamorano, y luego en castellano-leonés. Después se sitúan otras esferas, la nacional, la europea...

El provincialismo no siempre es negativo, arguye De Fernando. «No hay que menospreciar los movimientos provincianistas y regionalistas, potenciados por la firma del Pacto Autonómico». De Fernando no duda que en Castilla y León saldrá, para bien o para mal, un movimiento regionalista fuerte y radical, similar a los de otras comunidades. «Dependerá del comportamiento que podamos tener con el Pacto Autonómico», y recuerda que el presidente Felipe González se quejaba no hace mucho de la virulencia de los nacionalismos

rra definitivamente el proceso ni el desarrollo autonómico. Diez años después de la aprobación del Estatuto la pervivencia de la Comunidad es un hecho incuestionable. Para ellos, no estamos condenados a mantener estructu-

ras pasadas ni somos rehenes de acuerdos anteriores. Las nuevas transferencias y la amenaza de los movimientos localistas también ocuparon una parte del debate.

no es nada

regionales analizan el pasado, presente y futuro de la Autonomía



ICAL dio cita a los portavoces de los grupos parlamentarios en las Cortes de Castilla y León para analizar el pasado, el presente y el futuro de nuestra autonomía. De izquierda a derecha, José Luis Guerrero (director de la Agencia), Daniel de Fernando (CDS), Jesús Quijano (PSOE), Javier León de la Riva (PP) y Antonio Herreros (IU).

historicistas o de interés de Estado, que nos perjudican sensiblemente.

Quijano insiste de nuevo en el riesgo cierto de haber paralizado el proceso autonómico en los años de la UCD, y matiza que «no hemos estado presos de los acuerdos de 1981 como no lo vamos a estar de éstos». Pide que se deje perspectiva por delante y señala que el pacto de 1981 permitió reconstruir el proceso autonómico. «Hace diez años, en 1983, el Estatuto de

Autonomía de Castilla y León lo aprobó el PSOE solo con mayoría absoluta, con los votos del CDS, y contra la derecha regional de entonces», recuerda.

De Fernando, que es uno de los pocos políticos de la UCD que se ha mantenido en activo durante esta década, asegura que el pánico provocado por el 23-F motivó la firma de la LOAPA, «hoy afortunadamente desechada», dice. Reconoce también que la UCD consensuó con el

PSOE el borrador del Estatuto en mayo del 81, pero que fue paralizado por el entonces presidente del Gobierno Calvo Sotelo y por la posterior disolución de las Cortes.

«Los de Castilla y León»

«Negar el sentimiento autonómico sería negar lo evidente», dice León de la Riva. El ex consejero de Sanidad recuerda que hace unos años cuando visitaba los pueblos

les recibían con un «Vienen los de Castilla y León», como si fuéramos de otra galaxia. Hoy es prácticamente un hecho asumido, con la reserva de algunos movimientos localistas.

Quijano introduce una precisión conceptual sobre el sentimiento autonómico, para evitar un planteamiento negativo y siempre en comparación con otros. «La historia da a cada uno lo que la propia historia ha producido, y aquí no hay hechos diferenciales lingüísticos o culturales, ni ese sentimiento de carácter romántico de arraigo con su tierra y con su medio». Esta Comunidad Autónoma—continúa el portavoz del PSOE—es un hecho irreversible.

Daniel de Fernando también reconoce este avance, que ya no tiene nada que ver con los radicalismos absurdos de hace una década. «Aquellos radicalismos se cargaron Villalar», matiza el portavoz del CDS, que vivió de cerca todo el proceso preautonómico. Ahora todo es más sano y se muestra defensor de la recuperación de Villalar para que sea una fiesta de verdad como en otras comunidades.

Nuevas transferencias

La Ley de Transferencias está ya vigente y Quijano quiere dejar claro que no se trata de una ley de simple delegación. Porque lo delegado está sometido a instrucciones. Quijano señala que es una ley «necesaria y no un mero lujo añadido». Es cierto que las competencias se pueden transmitir sin reformar el Estatuto, como apunta De Fernando. Se trata—argumenta León de la Riva—de incorporar las competencias al Estatuto y de aportar estabilidad a esas competencias, que se integran en el Estatuto, con lo que la ley de transferencias queda vaciada de contenido y se podría derogar. Ese es el verdadero significado de la reforma, dicen los portavoces del PP y del PSOE. «Para cambiarla habrá que cargarse los estatutos», dice León.

Herreros y De Fernando no comparten ese entusiasmo de los defensores de la reforma. «Se quiere jugar con salvajes», dice De Fernando. Las competencias ya están transferidas por la Ley. «¿para qué entonces se reforma el Estatuto?». «Es una trampa para cumplir el requisito de los cinco años y decir que ya se ha modificado el Estatuto». «Ya no podemos exigir más competencias—insiste De Fernando—. No queremos que nos reformen el Estatuto hasta el 2050».

Herreros abunda en el mismo criterio. «No se trata de una reforma del Estatuto de Autonomía; sólo van a incluirse nuevas competencias delegadas, con mecanismos para suspender ese delegación. Es innecesaria, porque otras comunidades autónomas no han requerido ley alguna para aumentar sus competencias». «Provoca hilaridad—señala Herreros—que Segovia se mantenga como un anexo del Estatuto. Es una anécdota y un anacronismo». Para Herreros esta reforma ni siquiera recoge las competencias incluidas en el acuerdo aprobado por las Cortes regionales en 1988. Otras quedan fuera para siempre (comercio, minas, industria). El rechazo de la reforma lo justifica Herreros porque no se contemplan las aspiraciones de pleno gobierno que demanda el propio presidente de la Junta.

provincianos

radicales, y no sólo en las llamadas comunidades históricas. «La intransigencia a la hora de negociar empuja estos nacionalismos», según el portavoz del CDS, que no olvida los errores de la UCD en la génesis del nacionalismo andaluz.

Para Jesús Quijano, portavoz del PSOE, el tema es más complejo que los puros desgajamientos interesados. El hecho autonómico ha sido suficientemente asumido ya en la Comunidad, por lo menos como modelo, con algunas deficiencias en cuanto a percepción ciudadana del papel de las instituciones autonómicas. «Hoy por hoy—indica Quijano—, y sin saber cómo evolucionará esto, los movimientos regionales, provinciales o comarcales que hay en Castilla y León, incluso los que están organizados en partidos y cuentan con representación, no suponen amenaza alguna para la conformación de la Comunidad». En democracia—continúa—la fuerza real se mide por el respaldo en las elecciones democráticas, y estos grupos, a los que no desprecia, hasta ahora no han obtenido representación parlamentaria por sí mismos, a pesar del amplio número de escaños de las Cortes regionales.

«En Castilla y León—continúa Quijano—deberíamos rechazar una visión negativa del hecho provincial, que enriquece la Comunidad. Es un dato específico que debemos valorar como algo positivo, y que por suerte o por desgracia no se da en otras». La provincia es el resultado de nuestra propia historia y del carácter complejo, extenso, diverso de esta Comunidad y, según Quijano, no supone una contradicción con el hecho regional. Hay movimientos provinciales legítimos, con un arraigo histórico enorme, compatibles e integradores, concluye el portavoz del PSOE.

Tampoco Herreros ve una amenaza en los regionalistas, fomentados por un transfuguismo preocupante, y apuesta por la cooperación en el desarrollo del conjunto del Estado. «Estamos alimentando estos grupos al defender una reforma que no se adapta a las necesidades de Castilla y León». Herreros no niega razones históricas para que los leonesistas defiendan su concepción particular, «pero todos sabemos cómo nació eso y cómo se ha alimentado con un personaje cada vez más extraño y más raro, que busca su acomodo personal».



SUPLEMENTOS MONOGRÁFICOS ICAL



El periódico de mayor tirada de Castilla y León, comprado por 100.000 personas cada vez que llega a los kioscos. La única información en la Comunidad Autónoma que leen 500.000 lectores, avalada por los rotativos más importantes de Castilla y León.

Son los SUPLEMENTOS MONOGRÁFICOS ICAL, los de más impacto de la prensa regional. El mejor cauce para que su publicidad llegue a todos los rincones de la Comunidad más extensa de Europa. Con la fuerza de periódicos centenarios y la solidez de la agencia de noticias más importante de la región.

Si su trabajo consiste en fabricar los mejores productos, ICAL le ofrece la mejor relación calidad/precio para su publicidad.



LA DIPUTACION PROVINCIAL DE SEGOVIA

Custodia el legado de una bella y antigua tierra

ETAPA AUTONOMICA

1985

22 de mayo: finaliza la transferencia de competencias del Estado central a la Comunidad Autónoma.
27 de diciembre: se aprueba la Ley de Ordenación de la Función Pública.

1986

17 de abril: se declara por ley el 23 de abril como fiesta de la Comunidad.
14 de noviembre: investidura en las Cortes del nuevo presidente de la Junta de Castilla y León: José Constantino Nalda.
25 de noviembre: toma de posesión del nuevo Gobierno regional.



MANUEL ESTELLA HOYOS

“Las transferencias del Pacto Autonómico no son el techo constitucional”

El presidente de las Cortes regionales otea la asunción real de las nuevas competencias en 1995

Francisco Barrasa

Como sus antecesores en el cargo, los discursos institucionales de Manuel Estella Hoyos hacen suya la sintaxis del prólogo del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, conforme a la que esta demarcación administrativa no nació del éter en 1983 sino que es heredera secular de los dos reinos unificados por Fernando I, como si ello pudiera alegrar la vida de los demandantes de empleo o descontara en el recibo de la luz.

Ocupante hoy del sillón presidencial de las Cortes regionales, este abogado del Estado nacido en Salamanca hace 53 años se entrenó primero como procurador y luego como vicepresidente de la institución, por lo que es buen conocedor de esta atalaya de arbitraje en la función legislativa de la Comunidad.

— ¿Suscribe la opinión de quienes consideran que no hay ningún sector de la realidad social o económica en el que el Estado no se haya reservado las directrices sustantivas y por tanto el papel de los parlamentos regionales no pasa de ser un complemento por más que su trabajo se llamen leyes?

— No estoy de acuerdo. Las Comunidades Autónomas son también parte del Estado, y tienen facultad de autogobierno y de establecer normativas en su territorio. Las leyes que emanan de los parlamentos regionales tienen el mismo valor que las del Estado. Conforme al Estatuto de Autonomía de Castilla y León, existen competencias exclusivamente estatales, y en ellas no tenemos asignado papel; otras en cambio son de nuestra única responsabilidad; y una tercera vía es la de aquellos ámbitos en

los que corresponde a la Comunidad Autónoma la ejecución y el desarrollo de la norma básica que rige para todo el país.

— ¿Entonces no es cierto que las Cortes de Castilla y León pueden hacer poco más que aprobar reglamentos para la legislación básica del Estado?

— En aquellas materias cuya competencia exclusiva es de la Comunidad Autónoma, tenemos la potestad de legislar, ejecutar, desarrollar e incluso inspeccionar.

Leyes propias

— ¿Qué leyes aprobadas por las Cortes regionales entiende que son operativas para la vida diaria de los ciudadanos de la Comunidad?

— A lo largo de estos 10 años han visto la luz aproximadamente 90 leyes, pero efectivamente la bonanza de la autonomía no debe medirse en términos numéricos, sino en su significado profundo de descentralización del Estado y acercamiento de la Administración a los ciudadanos, lo que implica un mejor conocimiento de sus problemas traducido en una legislación peculiar para esta región. Esta relación directa con la idiosincrasia de la región se percibe en iniciativas que tienen que ver con el medio físico y ambiental, caso de la Ley de Pesca, o con la articulación del territorio, como la Ley de Ordenación Sanitaria.



— ¿No cree que la firma del Pacto Autonómico, presentado como una generosísima transferencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas, les ha dejado a ustedes en estas últimas como resignados vendedores de una pobre mercancía a sus conciudadanos?

— Es cierto que el Pacto Autonómico fue firmado por los dirigentes del PP y del PSOE con el Gobierno de la nación, y en ellos nada tuvieron que ver ni el Ejecutivo ni el Legislativo regional. Por eso ya dije el año pasado, al celebrar el noveno aniversario del Estatuto, que ese texto significaba un paso decisivo para las Comunidades de «vía lenta» como la nuestra, en el sentido de que vamos a ver elevado el techo competencial, pero que no es suficiente. Yo diría en términos potenciales que Castilla y León no debería renunciar a reivindicar todas las competencias que nos están constitucionalmente reconocidas, que son más que las que ahora nos delega el Estado.

— ¿No será el año electoral de 1993 un tiempo vacío para la asunción real de esas nuevas competencias?

— Al menos la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía en las Cortes Generales puede ser realidad antes de su disolución por la convocatoria de elecciones. Existe el compromiso entre PP y PSOE para que en el mes de abril lleguen al Congreso de los Diputados para su tramitación las reformas estatutarias aprobadas en los parlamentos regionales, y en el caso de Castilla y León creo que no habrá problemas porque los portavoces de ambos partidos trabajan ya en un texto conjunto.

Reforma articulada

— ¿Cuál será la fórmula para la reforma estatutaria?

— No será un artículo único sino un texto articulado, dando nueva redacción al artículo 26 y siguientes del Estatuto de Autonomía, donde se habla de competencias. Esa reforma la podríamos aprobar aquí, según el calendario previsto, a mediados del mes de marzo, de manera que el mes siguiente puede llegar a las Cortes Generales para su ratificación mediante Ley Orgánica.

— ¿Puede aclarar a los ciudadanos alguna fecha en la que de una forma tangible sea de la Junta y las Cortes la responsabilidad en las competencias contenidas por el Pacto Autonómico?

— En la práctica, la asunción de competencias no es inmediata. Su proceso posterior se verá paralizado por las elecciones generales, y hasta el año 1994 e incluso algunas competencias el siguiente, no tendrá la Comunidad Autónoma capacidad ejecutiva ni legislativa

Pasa a la página siguiente

Presente de indicativo o pretérito imperfecto

Es dudoso que la retroactividad resulte el mejor lubricante para prestigiar a las instituciones. Por más veces que se haya escrito o discursado el hecho de que la primera reunión de unas Cortes en toda Europa tuvo lugar en León cuando discurría el año 1188, la mayoría de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma apenas atisban en su memoria diaria que en el castillo de Fuensaldaña «hay algo de la política de la región», y ello bajo sometimiento a duro interrogatorio. Ocho siglos de sesiones par-

lamentarias intermitentes —muchos de ellos dedicados a pelear con monarcas los impuestos especiales destinados a guerrear— no están sirviendo para hacer popular el hemisferio donde trabaja hoy el cuerpo legislativo. La única esperanza parece depositada en los miles de escolares que han visitado el edificio recibiendo explicaciones de su significado en la organización administrativa y social en la que mañana pueden ser actores.

La Ley Orgánica 4/1983 dice que las Cortes de Castilla y León son institución básica

de la Comunidad Autónoma, y ejercen los poderes y atribuciones que corresponden constitucionalmente a los ciudadanos de este territorio. Dada esa premisa legal desde hace 10 años, queda por saber si su arraigo entre los habitantes de la región llegará antes por su capacidad para afectar las vidas y las haciendas de aquellos, o por la belleza de los tapices flamencos solicitados para adornar la solemne sesión de cumpleaños del próximo día 25. En el fondo, esto puede ser una pugna verbal: presente de indicativo contra pretérito imperfecto.

ETAPA AUTONOMICA



1987

10 de junio: elecciones autonómicas: AP es el partido más votado.
21 de julio: José María Aznar es investido como nuevo presidente de la Junta en las Cortes Regionales.
29 de julio: juramento y toma de posesión del nuevo Gobierno Autonómico.

1988

25 de mayo: las Cortes de Castilla y León consideran la proposición de Reforma del Estatuto de Autonomía.
28 de diciembre: el Parlamento regional aprueba la Ley de Acción Social y Servicios Sociales.

ENTREVISTA CON MANUEL ESTELLA HOYOS

Viene de la página anterior

al respecto. Algunos analistas consideran que la totalidad de las competencias que ahora se delegan pueden tardar un par de años en ser efectivas, sobre todo las de Universidad e INSERSO, que son las de mayor complejidad en la discusión sobre medios humanos y materiales.

—¿Le parece modélica la velocidad de respuesta de las consejerías de la Junta de Castilla y León a las preguntas de los procuradores de esta Cámara?

— En algunos casos, pero no se puede generalizar, hay consejerías que deben responder a un gran número de preguntas parlamentarias y están más abrumadas por ese trabajo, lo que determina en algún momento concreto el retraso en la respuesta. Cuando eso ocurre, la entidad interpelada ha pedido la correspondiente prórroga, fundada bien en lo voluminoso de la documentación requerida, bien en la necesidad de recabar datos que están dispersos por distintas oficinas de las nueve provincias que integran la Comunidad, y eso nos parece motivo suficiente para conceder la moratoria.

Un mismo discurso

—¿Es consciente de que un repaso a los discursos de los sucesivos presidentes de la Junta en el Debate sobre el Estado de la Región se parecen sospechosamente en sus contenidos desde 1984 a 1992?

— No es algo malo que cinco presidentes de la Junta, dos del PSOE y tres del PP, hayan coincidido. Eso es señal de que dejando a un lado la ideología de cada uno, les preocupan los problemas reales de la Comunidad Autónoma, y a todos ellos les interesa elevar la

calidad de vida de los ciudadanos de Castilla y León.

— ¿Será una sesión memorable de las Cortes la del 25 de febrero de 1993?

— Será una sesión solemne, porque la fecha lo merece. La década puede ser un momento apropiado para hacer unas reflexiones en voz alta ante las autoridades de toda la región sobre lo que significan nuestra autonomía y nuestra norma básica que es el Estatuto, sobre todo en este año que tenemos un reto tan importante como es su reforma.

— ¿Este décimo cumpleaños de la andadura autonómica cumple las expectativas personales de Manuel Estella Hoyos respecto a Castilla y León?

— Sinceramente, cuando yo empecé mi andadura política en la región no sabía donde estaba y no tenía trazada una meta para los diez años que ahora concluyen. Creo que ha sido un camino positivo el recorrido, pero también soy consciente que queda mucho por hacer, que no hemos llegado al final. Siempre ha habido problemas en una Comunidad tan extensa como ésta en orden a la conciencia y al sentimiento autonomista. En ese punto detecto todavía ciertas reminiscencias de provincialismo, cuyos mejores antidotos pueden ser la paciencia y seguir prestigiando las instituciones de autogobierno cuyo aniversario celebramos ahora.

NOTA DE LA REDACCION

En este suplemento se había contemplado un artículo que estaba comprometido con el que fuera primer presidente de las Cortes de Castilla y León, Dionisio Llamazares. Al cierre de esta edición, el original no había llegado a la redacción de ICAL.

La necesaria reforma estatutaria

Transcurrida una década —el doble, exactamente, del tiempo previsto al respecto por la Constitución— desde la aprobación de nuestro Estatuto de Autonomía, nos encontramos, al fin, en el umbral de una reforma de nuestra norma básica de autogobierno destinada a elevar los techos competenciales de nuestra Comunidad. Algo que, sin prejuzgar ritmos y estrategias, respetando toda la prudencia que pudiera considerarse necesaria y, preferentemente, desde un compromiso entre todos los grupos políticos, me permití apuntar, hace ahora un lustro, como ineludible nuevo horizonte en nuestro proceso autonómico. Fue éste el contenido de un discurso institucional, en Salamanca, con ocasión del V aniversario del Estatuto de Autonomía, que no contó, precisamente, con todos los beneplácitos, aunque ninguna fuerza política de nuestra Comunidad en ningún caso se mostrase abiertamente contraria a la prosecución del proceso autonómico.

Se cuestionaba entonces, ciertamente, por parte del Gobierno de España y del Partido Socialista, si debía hacerse uso del mecanismo normal previsto por los constituyentes para elevar las competencias de las comunidades constituidas al amparo del artículo 143 de la Constitución, como es el caso de Castilla y León. Parecían, más bien, decantarse por una fórmula extraordinaria y pensada para otros techos competenciales y otras comunidades, como son las leyes orgánicas de transferencias, utilizada ya para Canarias y la Comunidad Valenciana. Evidentemente es muy probable, además, que aparte del procedimiento a seguir, se objetase si era ya el momento de dar un nuevo impulso al proceso autonómico. Lo prueba que, un año más tarde, una iniciativa de las Cortes de Castilla y León para que se transfirieran las competencias en materia educativa no corrió mejor suerte en el Congreso de los Diputados que otra, coetánea, de asunción de competencias previstas en el propio Estatuto, a través de la todavía inédita vía de la reforma.

No diré ahora que el tiempo me ha dado la



CARLOS SANCHEZ-REYES DE PALACIO
Ex presidente de las Cortes de Castilla y León

razón, puesto que puede existir una legítima diversidad de criterios de oportunidad que justifique el aplazamiento. Para algunos —entre los que me cuento— resulta, no obstante, lógico pensar que se han desaprovechado unos preciosos años en la profundización de un modelo como el del Estado de la Autonomías, que la Constitución dejó abierto, pero estableciendo también ciertos plazos y que la prudencia y la oportunidad en el ritmo de desarrollo no exigía, necesariamente, no comenzar la andadura cuando estaba previsto constitucionalmente. Lo importante, en cualquier caso, es que volvemos a ponernos en camino y de ello debemos regocijarnos todos cuantos creemos en la bondad

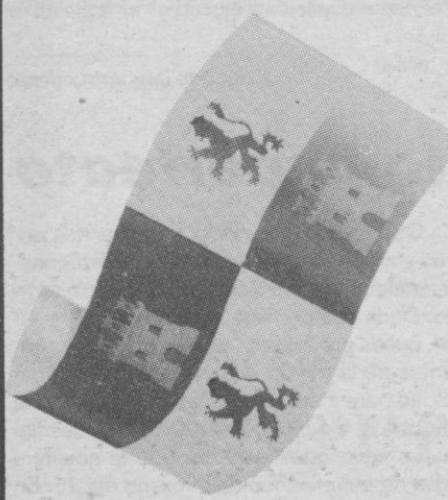
del proceso autonómico. El ritmo que se dé ahora al proceso de transferencias puede hacernos recuperar parte del tiempo perdido.

Motivo de especial satisfacción es que se recurra a la necesaria reforma estatutaria, junto a la ley orgánica homologadora de las competencias a transferir a las diversas comunidades, por lo que ello tiene de garantía y protección constitucional, como apunté también en Salamanca.

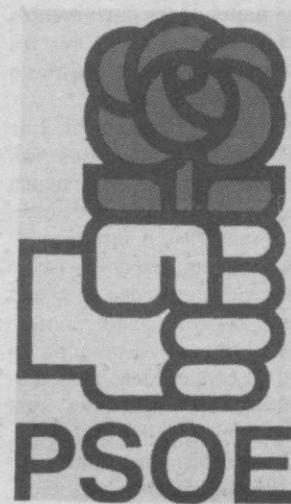
Me preocupa, no obstante, el alcance competencial de la reforma. Con las nuevas competencias estatutarias, Castilla y León, como el resto de las que ahora reforman sus estatutos, reduce las diferencias con las otras comunidades, pero no las elimina. Quiero pensar que sean sólo nuevas razones de oportunidad las que determinan que con este paso importante que se da ahora no se acabe con la «asimetría» que presenta el Estado de las Autonomías, que no creemos deba constituir una característica permanente del mismo.

Bienvenidas, pues, las nuevas competencias y la inminente reforma estatutaria, pero quede claro que el proceso autonómico seguirá abierto hasta que, por lo que a nosotros respecta, Castilla y León pueda libremente equipararse, a nivel competencial, con cualquier otra comunidad, en el marco de lo que la Constitución dispone.

1983-1993 DIEZ AÑOS DE AUTONOMIA



A los socialistas de Castilla y León nos correspondió poner en marcha la Comunidad Autónoma y sus instituciones de autogobierno. Hoy en día, tras estos diez años, aquella tarea ha dado su fruto y Castilla y León cuenta con unas instituciones asentadas que con la reforma del Estatuto conseguirán más competencias para nuestro autogobierno.



ETAPA AUTONOMICA

1989

16 de septiembre: cese, a petición propia, de José María Aznar como presidente de la Junta de Castilla y León. Le sustituye como presidente Jesús Posada Moreno.
6 de octubre: se promulga la Ley de incompatibilidades de los miembros de la Junta de Castilla y León.

1990

25 de octubre: Decreto Legislativo que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
28 de noviembre: Ley de creación del Registro de Intereses de los miembros de la Junta de Castilla y León y otros cargos de la Comunidad.
28 de noviembre: Ley del Consejo Económico y Social.



Nuevas perspectivas ante la reforma del Estatuto

La consolidación de la Comunidad

MIGUEL ANGEL TRAPERO GARCIA

Procurador regional por el PSOE

El pasado 25 de diciembre, a la vista de los antecedentes contemplados en el espíritu y letra tanto de la Constitución Española del 78 como del propio Estatuto de Autonomía entra en vigor la Ley Orgánica de Transferencia de Competencias a Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 153 de la Constitución, resultando de los acuerdos autonómicos firmados el 28 de febrero del mismo año y en el que se fijarán las bases para poner en práctica este proceso.

Con toda seguridad, no podríamos imaginar un prólogo y una antesala más coherente y adecuados para conmemorar el X Aniversario del Estatuto de Autonomía de nuestra Comunidad y para proceder serenamente, pero con todas las exigencias constitucionales precisas, a su inminente reforma.

Llegados a este punto, no es ocioso recordar desde la perspectiva de Segovia y su provincia, que en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, al hacer expresa mención en su Artículo 2º del Ambito Territorial de la Comunidad, no figura enumerada la provincia de Segovia, si bien en virtud de la Ley Orgánica 5/1983 de 1 de marzo, mediante la utilización de mecanismos previstos en la letra c del Artículo 154 de la Constitución Española sobre una interpretación motivada en superiores relaciones de Estado, Segovia quedó incorporada a dicho proceso autonómico a esa inicialmente tibia autonomía de la Comunidad Castellano-Leonesa, resultante de la Ley Orgánica 4/1983 de 25 de febrero de cuyo X Aniversario celebramos precisamente en estas fechas y cuya fundamentación política y administrativa quiere hundir sus cimientos en raíces históricas, culturales y económicas, a la búsqueda de una cierta identidad histórico-social, en buena medida, al menos, contextual.

Por esa misma duplicidad de procedimientos orgánicos de incorporación al proceso autonómico de Castilla y León, Segovia no aparece ahora con motivo del Pacto Autonómico y de la propia reforma del Estatuto en el articulado textual del nuevo Estatuto, aunque como es natural pertenezca de hecho y de derecho al ámbito territorial fijado en el Estatuto para el resto de las provincias de la Comunidad, territorio común que día a día va fraguando una identidad suficiente, y que como toda extensión humana y geográfica larga y con historias a veces paralelas, a veces distintas, y a veces íntimamente referidas, requiere una vertebración superior que le per-

ATILANO SOTO RABANOS

Presidente de la Excm. Diputación Provincial de Segovia

mita lanzarse a un proyecto común de renovada ilusión de perfeccionamiento político, administrativo y social.

La reforma de este Pacto Autonómico, que por cierto ha tenido que esperar cinco años más de los exigibles, viene a desarrollar el nivel competencial prefigurado ya en la Constitución para las Comunidades Autónomas del Artículo 143, como es la nuestra, en un decidido avance hacia una autonomía más completa. El nuevo nivel competencial da paso a múltiples posibilidades que permiten decididas actuaciones, para que la gestión autonómica sea mucho más profunda y ágil. La reforma debe incitarnos a avanzar con toda la rotundidad que la Constitución

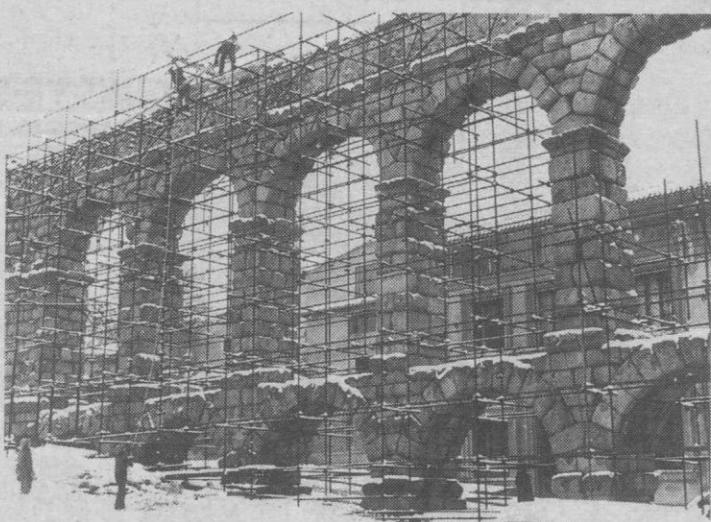


Comunidad Autónoma y en el horizonte del Artículo 20 del Estatuto de Autonomía, las Diputaciones Provinciales deben asumir una serie de competencias que, si por una parte, posibilitan la puesta en práctica de aspectos muy concretos dentro del ámbito provincial, por otra generan un nuevo capítulo de preocupaciones y de responsabilidades, por el exigente compromiso que tales traspasos comporta. En todo caso, la recepción de competencias exige explícitamente la transmisión de los necesarios recursos materiales y humanos que bien dimensionados hagan efectiva y más eficaz la asunción de las mismas. El ámbito presupuestario tiene necesariamente que huir de planteamientos ambigüos y establecer las suficientes coberturas que permiten, juntamente con una mayor libertad de gestión, profundizar en la descentralización política y administrativa.

En virtud de la reforma del Estatuto en el marco del Pacto Autonómico tenemos ante nosotros un nuevo reto histórico. Hemos de recibirlo con la mayor de las ilusiones y confiar en los valores humanos de nuestras gentes para que con el apoyo y la fuerza que dicho Estatuto nos entrega sepamos conducir a nuestros hombres y a nuestras tierras, a un mayor progreso, a un perfeccionamiento de los principios democráticos y en suma, a lo que fue un proyecto, capaz de cristalizar en una gozosa realidad.

Coinciden estas conmemoraciones y estos trabajos con un tiempo presidido por el ánimo presencial y reivindicativo del llamado poder local. Ahora bien, siendo como va a ser éste, un especial año autonómico,

no sólo por la celebración del Estatuto en su X Aniversario, sino por el desarrollo estatutario mismo, bueno será que no se borre del horizonte de las preocupaciones y decisiones lo que ya en varias ocasiones he tenido la oportunidad de llamar Pacto Local de Lealtad Institucional, a cuyo objetivo tanto los ayuntamientos como las diputaciones de nuestra Comunidad a través de su representación regional de la F.R.M.P., ha dado ya los primeros y oportunos pasos, de modo que en un ambiente de voluntades políticas compartidas con el Gobierno de la Junta de Castilla y León y en un ámbito de serenidad y diálogo exigente, se puede lograr una armónica y racional redistribución competencial y un clima permanente de colaboración, cooperación y mútua autonomía, «como mandan los cánones» y teniendo en cuenta que estas grandes obras son cosa de todos.



Aunque parezca una anécdota, Segovia se mantiene como un anexo del Estatuto.

ampara, en una adecuada y ordenada dirección en pro de todos los ciudadanos.

Las Comunidades, como la nuestra, empiezan a entrar ya en lo que pudiéramos llamar homogenización competencial autonómica y de ello debemos felicitarnos, en primer lugar, porque se revalida por aproximación el modelo constitucional con la justa equiparación con otras comunidades, que accedieron a la autonomía por la vía del Artículo 151; y en segundo lugar, porque nos faculta una acción política y administrativa superior y nos entrega, en principio, los mecanismos necesarios para impulsar el desarrollo exigido y compartir la necesaria solidaridad interterritorial, que ya aparecía en el Artículo 2º de nuestra Constitución.

En el ámbito de este desarrollo constitucional de las competencias de la



El 25 de febrero se conmemora el X Aniversario de la aprobación por las Cortes Generales, del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y parece un momento oportuno para hacer un breve repaso sobre lo ocurrido en estos años, y sobre las tareas de carácter institucional que todavía quedan por realizar.

Parecen ya tremendamente lejanos aquellos comienzos, donde incluso la integridad territorial de la Región era discutida en algunas provincias, como fue el caso de Segovia. Tremendamente lejano porque lo menos que podríamos decir es que nuestra provincia ha vivido su pertenencia a Castilla y León con absoluta normalidad y con un interés y participación creciente.

Decisiva para la consolidación de nuestra Comunidad Autónoma fue la primera legislatura, de 1983 a 1987, gobernada por los socialistas, y en la que se puso en marcha y se dio contenido a las instituciones regionales, Cortes de Castilla y León y Junta, se asumió el núcleo principal de las competencias posibles en esa fase, y en la que se edificó la estructura administrativa y material, se aprobó parte importante de la legislación básica y los planes de actuación sectorial imprescindibles para ejercer con racionalidad las competencias asumidas.

Otro paso importante en la consolidación de la Comunidad se dio en la segunda legislatura, con la aprobación de la Ley de Sedes, que cerraba un largo contencioso dentro de la Comunidad y fijaba, definitivamente, la ubicación de las principales instituciones de Castilla y León.

Ya en esta tercera legislatura, en las próximas semanas, se va a realizar la reforma del Estatuto de Autonomía, que aumentará las competencias de la Comunidad Autónoma hasta niveles semejantes a los que ya tienen las «comunidades históricas». Asimismo, durante esta legislatura se aprobará una figura semejante a la del Defensor del Pueblo, para el ámbito de Castilla y León, encargada de la defensa de las libertades y derechos de los ciudadanos ante la Administración regional.

Para hacerse una idea clara del nivel de actuación y competencial de la Comunidad, de un presupuesto inicial de 4.000 millones de pesetas, se pasó al final de la primera legislatura a otro de 70.000 millones, y para este año es de unos 200.000 millones, que previsiblemente se duplicará con la asunción de las nuevas competencias que asumirá la región.

No obstante el tremendo avance que supone todo esto, nos parece que todavía algunos casos pendientes que deberían resolverse en los próximos años. Entre todos ellos habría que destacar la necesidad de transferir a las corporaciones locales una parte de las competencias recibidas por la Comunidad desde el Estado, que permitiera el reequilibrio entre el peso de la Administración autonómica y la local, y un mayor grado de descentralización y proximidad al ciudadano del ámbito donde se toman algunas decisiones.

ETAPA AUTONOMICA



1991

30 de marzo: Ley de Modificación de la Ley Electoral de Castilla y León.

1 de abril: convocatoria de elecciones a las Cortes de Castilla y León.

5 de julio: cese de Jesús Posada Moreno como Presidente de la Junta de Castilla y León. Se elige nuevo Presidente a Juan José Lucas Jiménez.

11 de julio: toma de posesión del nuevo Gobierno Regional.

1992

16 de enero: Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Económico y Social de Castilla y León.

13 de julio: Ley de autorización de constitución de la Empresa Pública para la Conmemoración del V Centenario del Tratado de Tordesillas.

Agencia ICAL

Agencia de Noticias de Castilla y León
Santiago 23, 2º Izq.
47001 - Valladolid
☎ (983) 33 43 33 - 33 43 88
Fax: (983) 34 27 51

Director General

Saturnino Lorenzo García

Gerencia

Roberto Tascón Vicente

Director

José Luis Guerrero Elvira

Redactora-Jefe

María Romero Mayor Jiménez

Redacción

Víctor Iriarte, Carmelo de Lucas, Teresa Velilla, Ignacio Pagazaurtundua, Francisco Barrasa, Antonio Corbillón, Fernando Alda (Ávila), Montserrat Gómez y Gustavo Basurto (Burgos), María Jesús Muñoz y Ana Gaitero (León), Jorge Cancho (Palencia), Nunchi Prieto (Salamanca), Marcelo Garrido y Jesús Martínez Calle (Segovia), Jesús Javier Veramendi (Soria), Alexander Echeguibel y María Hernández (Zamora), Ignacio Miranda (Madrid)

Documentación

Tomás Hoyas

Administración

María José Albillos
Inmaculada Albillos
Isabel Domenech
Eva Bernal

Publicidad

Departamento de ICAL

Fotografías

Archivo de los diarios asociados.

Portada

VB/Cuadrado

Maquetación/Infografía/Filmación

VB Imagen y Comunicación

☎ (947) 20 21 76

Fotomecánica

Punto y Trama

Edita

ICAL, Diarios Castellano-Leoneses Asociados, S.A.
El Diario de Ávila
Diario de Burgos
Diario de León
El Diario Palentino
La Gaceta Regional de Salamanca
El Adelantado de Segovia
Diario de Soria

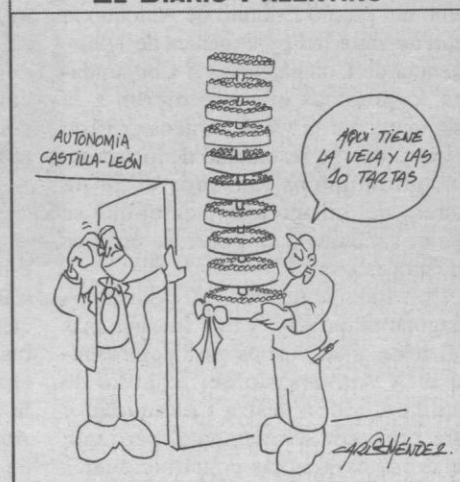
La efemérides de la celebración del X aniversario del Estatuto de Autonomía no podía pasar sin ser vista por los humoristas que habitualmente publican sus chistes en los

periódicos del grupo ICAL. Agradecemos muy especialmente su colaboración a Madrigal, Javier Abel, Carlos Méndez, Waldo Walkiria y PPTO.

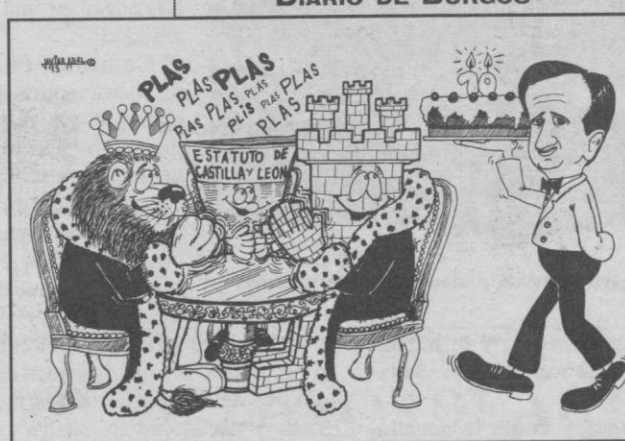
Waldo Walkiria
LA GACETA REGIONAL DE SALAMANCA



Carlos Méndez
EL DIARIO PALENTINO



Javier Abel
DIARIO DE BURGOS



Madrigal
EL ADELANTADO DE SEGOVIA



PPTO
EL DIARIO DE ÁVILA





Una encuesta callejera realizada por los periódicos del grupo ICAL entre un centenar de personas, en las nueve provincias de la región, revela —con la

matización por delante de que no tiene valor científico— que existe un mínimo grado de acercamiento entre el ciudadano de Castilla y León y su Par-

lamento regional, entre el votante y el seguimiento que realiza a la actividad posterior del cargo electo.

Las Cortes regionales son aún desconocidas para los ciudadanos

Una encuesta callejera refleja la desinformación existente sobre el Parlamento autonómico

ICAL

La primera impresión que se saca del conjunto de las respuestas obtenidas es que la falta de información crece en los estratos más jóvenes (estudiantes, empleados, parados, etcétera) y de jubilados, mientras que las generaciones en teoría encargadas de hacer funcionar el país y por tanto «al día» —entre 30 y 60 años— dividen su falta de datos según el tipo de profesión o cargo.

Los miembros de profesiones «liberales» conocen, no todos, la existencia del Parlamento regional y su verdadera función, e incluso aportan alguna de las leyes aprobadas, como por ejemplo la de la Función Pública —Burgos—, la inminente Ley de Ordenación del Sistema Sanitario —Burgos—, Ley de Presupuestos —Soria—; en Avila se apunta una inexistente Ley del Parque Regional de Gredos, o una Ley de Medio Ambiente en Burgos.

Los grupos con menor formación o más alejados de las fuentes de poder no sienten rubor en reconocer su desinformación o desinterés, en el más amplio de los sentidos. Incluso en Palencia una de las respuestas fue: «¡Ah!, ¿pero hacen leyes?».

Desde Salamanca hay una respuesta curiosa sobre las leyes aprobadas por las Cortes: «Ochenta en las dos primeras legislaturas, aunque la política más innovadora ha sido la de José Luis Sagredo».

Para todos los gustos

La primera pregunta realizada en cada provincia fue: «¿Sabe usted qué son las Cortes de Castilla y León y para qué sirven?». Las contestaciones fueron desde «órgano legislativo que elabora leyes sobre competencias transferidas» —Burgos— hasta «pandilla de manganos que van a su momio» —Valladolid—. En general se intuye que es «como el Congreso en Madrid», «el parlamento regional», «los que gobiernan», «un organismo público en el que se toman decisiones», etcétera.

La segunda cuestión planteada, que ofrece aspectos muy significativos dada la coincidencia de casi todos en el error, fue si conocían el nombre del actual presidente de las Cortes de Castilla y León, que no es otro que Manuel Estrella Hoyos, procurador del Partido Popular por Salamanca.

Menos en esa provincia, donde lógicamente se le conoce bien por su cargo de presidente provincial del PP, y una respuesta en Palencia y Segovia, el resto de entrevistados ofreció nombres tan dispares como Juan José Lucas —el más nombrado, por la evidente y lógica confusión



Jesús Fernández, 42 años, administrativo

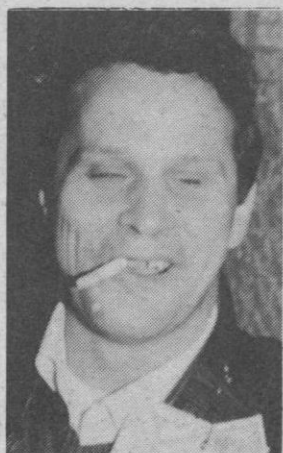
1.- Sí, la del control a nivel institucional y la de elaborar decretos y leyes; lo mismo que el Parlamento nacional.

2.- No.

3.- Sí; su labor es imprescindible para poder controlar la labor del Gobierno.

4.- No lo he leído.

5.- Creo que sólo tenemos competencia en Educación.



Pedro Sánchez, 35 años, vendedor ONCE

1.- Sí, para lo que todas las cortes, otra cosa es que se utilicen o no.

2.- No sé quien es.

3.- Sí, siempre que funcione, aunque en ese sentido somos una autonomía de tercera categoría.

4.- En parte sí; sé que no se aplica y deja mucho que desear; ojalá tuviéramos el de Cataluña o Euskadi.

5.- ¿Se ha aprobado alguna? Que yo sepa, sólo la de subirse el sueldo.



Araceli Sastre, 47 años, ATS

1.- Sí, para gobernar la región.

2.- No.

3.- Sí, creo que es útil.

4.- No.

5.- Ni idea.



Enrique de Pablos, 27 años, camarero

1.- No, ni sé lo que es.

2.- No.

3.- Sí, porque creo que solucionará problemas que de forma individualizada no podrían resolverse.

4.- No.

5.- No, estoy poco puesto.



Eugenio Barreno, 41 años, vendedor de prensa

1.- No.

2.- No.

3.- Eso es nulo, sólo están para llenarse el bolsillo.

4.- No.

5.- No, sólo quiero que pongan la pena de muerte.



Rosamunda Sanz, 30 años, profesora

1.- Las conozco, pero mucha utilidad no las veo.

2.- No.

3.- Yo apuesto más por Europa, y el resto de debates son primitivos. Hay que tener un espectro más amplio que el que se tiene, porque vamos a terminar haciendo cortes en el río Eresma.

4.- Sí.

5.- De Castilla y León no me interesa nada.



Javier Lázaro, 28 años, artista

1.- Sí, para hacer las leyes.

2.- No.

3.- En general, creo que está multiplicada la gestión administrativa del Estado. Hay muchas administraciones, lo cual no facilita mucho la administración.

4.- No.

5.- Estoy muy desorientado, paso mucho.

entre poder ejecutivo y legislativo—, Demetrio Madrid —dos encuestados de Valladolid todavía le recuerdan en la cúpula—, Jesús Posada —Soria—, el mismísimo Felipe González —Zamora—, o simplemente afirmaron no tener «ni idea» (sobre todo los jóvenes).

Todos contra Madrid

En tercer lugar se preguntaba sobre la utilidad o no de la existencia de un Parlamento en la Comunidad Autónoma. La intuición de la mayoría de los encuestados es que se trata de una institución útil porque está más cerca que Madrid de los problemas de los ciudadanos.

Algunos denuncian que es un gasto que no merece la pena —caso de Valladolid o Palencia—, en el sentido de que se duplica la burocracia y se multiplica la gestión administrativa. Proponen éstos fórmulas de vuelta al centralismo, como el caso de Avila, donde una persona asegura que con los gobiernos civiles es suficiente. Hay otros que valoran sin embargo el papel de los procuradores regionales como «defensores de nuestros intereses» y como «conseguidores» de más ayudas procedentes de la Administración central.

Otra de las vertientes apuntadas de forma mayoritaria en las respuestas es la importante labor de control que el Parlamento regional, al igual que el Congreso de los Diputados, debe ejercer sobre las decisiones del Ejecutivo.

Alguna respuesta ha sido significativa por la coincidencia en afirmar que Castilla y León es una autonomía «de tercera categoría» o «de regional preferente que debe jugar la liguilla de ascenso», por ejemplo en Salamanca. Se destaca también la diferencia con otras comunidades «más favorecidas», caso sobre todo de Cataluña —respuesta de Valladolid y de Segovia—.

Desde Burgos se apuntó por ejemplo que las Cortes serían más útiles si hubiera verdaderas transferencias e igualdad entre autonomías, con un órgano interterritorial que se preocupara del equilibrio y que evitara agravios comparativos como los actuales. Una respuesta señalaba con acierto que dada la carencia de recursos y de población en Castilla y León lo más prudente es que sean los representantes de la Comunidad los que legislen en aspectos tan importantes como los sanitarios o los sociales.

Las contestaciones acerca del grado de conocimiento del contenido del Estatuto de Autonomía son en general negativas, al tratarse de un texto que, al igual que la Constitución, se sabe que existe pero nunca se ha leído.

TODOS JUNTOS

JC

**CCYL**

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

**Junta de
Castilla y León**